

Cambios globales y balances de poder en momentos de desequilibrio: una interpretación desde Bolivia

Global Changes and Balances of Power in Times of Disequilibrium: An Interpretation from Bolivia

*Franco Gamboa Rocabado**

* Doctor en Gestión Pública y Relaciones Internacionales por la London School of Economics and Political Science, Inglaterra. Profesor invitado en la Universidad de Marymount, Washington, Estados Unidos. Correo electrónico: franco.gamboa@gmail.com.

Resumen

Este artículo analiza las principales tendencias en la readecuación de los balances de poder, donde América Latina sigue estando sometida al vaivén de múltiples contradicciones. No logró reimpulsar sus condiciones de productividad y competitividad, de manera que las crisis económicas han hecho que la desigualdad se expanda constantemente, junto con el retorno de varias formas de autoritarismo. Las promesas de un futuro promisorio gracias a la globalización, tropiezan siempre con el auge económico más sólido de varios países en Asia, la persistencia de la pobreza, la profunda corrupción institucionalizada y la crisis de un Estado latinoamericano que ya no puede controlar sus fronteras, ni tampoco la presión del crimen organizado. Estos fenómenos actúan como las raíces que ponen en duda el optimismo de un avance substancial en materia económica, además de convertir a la región en un escenario de constantes desequilibrios. El análisis se realiza desde la perspectiva de Bolivia, sus problemas como país enfrentado con Chile por el acceso al mar y por los efectos que Evo Morales ha desarrollado durante su gestión como presidente del país.

Palabras clave: Balances de poder, globalización, posneoliberalismo, conflictos de poder, desequilibrios internacionales.

Abstract

This article analyzes the main trends in the middle of the readjustments of the balance of power in the international arena, where Latin America is still subdued to multiple swinging contradictions. It did not reboot its productivity and competitiveness conditions, so the economic crises expanded inequality together with the return of several forms of authoritarianism. The promises of an auspicious future thanks to globalization, always stumbled with the economic boom of other countries in Asia, the persistence of poverty, the deep institutionalized corruption and the crisis of a Latin American State that is unable to control its frontiers, nor the pressure coming from organized crime. These phenomena functions as roots that arise many doubts about the optimism in a substantial economic improvement, besides it turns the region into a scenario of constant unbalances. The analysis is made from the perspective from Bolivia, its problems as a country in conflict with Chile due to the access to the Pacific Ocean, and due to the effects that Evo Morales developed in his tenure as president of the country.

Key words: Balance of power, globalization, post-neoliberalism, conflicts of power, international imbalances.

Introducción

La posibilidad de lograr un orden internacional más armonioso, posible-mente tiene un trasfondo moral y, al mismo tiempo incierto, sobre todo si evaluamos la terrible descomposición de todo el sistema social, económico y político en Venezuela y Haití, así como las múltiples crisis del Estado en países como El Salvador, Honduras o Guatemala. Esta situación de desequilibrios y dudas en torno a la subsistencia de los sistemas democráticos y las ilusiones para lograr una mejor integración regional, nos conduce una vez más a la necesidad de retomar las reflexiones sobre los balances de poder, dejando de lado los viejos temores sobre una dependencia latinoamericana subordinada a los poderes hegemónicos localizados en Estados Unidos y Europa occidental. Hoy en día existe la necesidad de comprender el carácter y la profundidad de nuevos tipos de confrontación donde los intereses de cualquier Estado tienden a ser protegidos desde políticas de seguridad y defensa, afincadas en la fortaleza militar (Lake, David and Robert Powell, 1999).

En el siglo XXI, se comprueba una vez más que no será posible limitar fácilmente la carrera armamentista, sino es por medio del rediseño de nuevos balances de poder que, eventualmente, puedan fomentar un *compromiso* en función de la solidaridad, la necesidad de evitar una hecatombe nuclear, así como fomentar una interdependencia constructiva y el cultivo de la paz en forma duradera (MacDonald, 2010). Sin embargo, es aquí donde América Latina tiende a rezagarse al no poder enfrentar con mayor determinación una agenda de seguridad y defensa con plena fortaleza de acuerdo con los retos actuales. Al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de afrontar una oportunidad para reconstruir nuevas estrategias de integración, con la finalidad de abordar amenazas globales como la destrucción del planeta, el crimen organizado, la penetración del narcotráfico en las estructuras estatales y una contribución más responsable en materia de crisis y ayuda humanitaria (Mathieu, y Niño Guarnizo, 2010).

Los procesos de globalización, sus impactos y la necesidad de interpretar mejor el conjunto anárquico de las relaciones internacionales en América Latina, promueven una serie de reflexiones sobre dos aspectos.

En primer lugar, la decadencia progresiva del liderazgo hegemónico de los Estados Unidos y de la misma Unión Europea, afectados profundamente por una crisis financiera y por la ausencia de soluciones durables que faciliten el funcionamiento de un orden global armonioso. La persistente guerra civil en Siria, junto a la progresiva insatisfacción sobre cómo atender los campamentos de refugiados y los inmigrantes sirios en diferentes países de Europa, han desactivado casi por completo las alternativas de Estados Unidos para continuar con un liderazgo reconocido, lo cual, al mismo tiempo, aumentó un sentimiento antiamericano.

Esta decadencia de liderazgo provocó un estancamiento lamentable en la identificación de soluciones políticas, diplomáticas e inclusive militares en la crisis venezolana. El grupo denominado *Mecanismo de Montevideo*, iniciativa impulsada por México y Uruguay, no pudo abrir los canales de negociación y aproximación que se esperaban, tanto para evitar una mayor confrontación violenta entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro, como para reducir los peligros a los que fue sometida la cooperación humanitaria. En lugar de una solución pactada, surgió con fuerza la presencia de Rusia y China que respaldaron a Maduro, provocando una mayor incertidumbre sobre cómo proteger a la sociedad civil venezolana, en momentos donde la hegemonía estadounidense es cuestionada en el continente mismo donde solía tener una influencia casi incuestionable (Mijares, 2017).

Frente a este desafío continental, los Estados Unidos han planteado un reajuste en su estrategia de seguridad nacional, identificando a Rusia y China como las principales amenazas a la seguridad y la paz en América Latina y el mundo (Freier, *et al.*, 2017). Simultáneamente, la Cámara de Representantes estadounidense, aprobó a finales de marzo de 2019, un proyecto de Ley para reducir sustancialmente la amenaza ruso-venezolana, con el objetivo de limitar el acceso de armas para Nicolás Maduro e incrementar la ayuda humanitaria. De cualquier modo, existe una mayor suspicacia respecto a la efectiva capacidad que Estados Unidos tiene, tanto para encontrar una solución política en Venezuela, como para implementar el impulso de una intervención militar. Estas incertidumbres abrieron el paso para que Rusia y China traten de conquistar un espacio, no sólo diplomático, sino también económico-militar en materia de pugnas globales, en función de un reordenamiento multipolar en

América Latina (Rouvinsk, 2019). Estados Unidos ha perdido mucho espacio, pero, simultáneamente, busca recuperar una hegemonía que es contantemente cuestionada debido a los pésimos resultados obtenidos durante las intervenciones militares en Irak, Afganistán, Libia y Siria.

Hay un resurgimiento de los Estados nación que parecían haber desaparecido por las influencias comerciales y tecnológicas de la globalización; sin embargo, las potencias como India, China y Rusia tratan de expandir su fuerza global, paralelamente a la reivindicación de sus nacionalismos y fronteras territoriales. Ya no existen garantías políticas, económicas o ideológicas para fomentar sociedades globales más liberales y democráticas. Aquí los Estados Unidos también se han rezagado y perdieron credibilidad porque los 40 millones de pobres que luchan por sobrevivir, terminan cualquier ilusión en torno al sueño americano de prosperidad y poder ilimitado, que aparentemente tenían después de la desaparición de la Unión Soviética (Human Rights Council, 2018). El hundimiento de la hegemonía estadounidense, dio paso para los problemas de seguridad mundial como el cambio climático, la migración, el terrorismo, la desigualdad y el rápido cambio tecnológico que aumentan la inseguridad, junto con el regreso del populismo y el autoritarismo (Muggah, 2016).

En segundo lugar, se tiene la emergencia de economías que están marcando el horizonte de nuevos balances de poder, como es el caso de la Alianza del Pacífico y el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) que articula a Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay, opacando aún más la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Estos impulsos diplomáticos y comerciales buscan recomponer la correlación de fuerzas en el tablero regional ante el decaimiento de Brasil, cuyas posibilidades políticas y económicas buscaban convertirlo en una fuerza contra-hegemónica latinoamericana. El horizonte discursivo se orientó hacia la coordinación en el Cono Sur de políticas públicas, defensa de la democracia, independencia de poderes, fortalecimiento de la economía de mercado y una adecuada agenda social con sostenibilidad. Sin embargo, la gran pregunta que también surge con fuerza es si un nuevo mapa de los balances de poder podrá desarrollar tratados de cooperación en seguridad y defensa, la apertura de nuevas bases militares con la ayuda de Estados Unidos y la partici-

pación en operaciones conjuntas, con la finalidad de establecer un reequilibrio geoestratégico de mayor solidez, frente a la presencia cada vez más fuerte de China y Rusia en la región.

Así, este artículo analiza las principales tendencias en la readecuación de los balances de poder, donde América Latina sigue estando sometida al vaivén de múltiples contradicciones. No logró reimpulsar sus condiciones de productividad y competitividad, de manera que las crisis económicas han hecho que la desigualdad se expanda constantemente, junto con el retorno de varias formas de autoritarismo. Las promesas de un futuro promisorio gracias a la globalización, tropiezan siempre con el auge económico más sólido de varios países en Asia, la persistencia de la pobreza, la profunda corrupción institucionalizada y la crisis de un Estado latinoamericano que ya no puede controlar sus fronteras, ni tampoco la presión del crimen organizado. Estos fenómenos actúan como las raíces que ponen en duda el optimismo de un avance sustancial en materia económica, además de convertir a la región en un escenario de constantes desequilibrios (Kaplan, 2013).

Al mismo tiempo, el impacto de los desequilibrios globales en un país como Bolivia es, por demás, significativo y con consecuencias disímiles. Este país andino adquirió una notoriedad internacional debido a la sorpresiva victoria de Evo Morales en las elecciones presidenciales del año 2005. Cumplió trece años consecutivos en el poder (2006-2019) y expresó las contradicciones del sistema internacional, al haber transitado por una carrera política que le debe todo a su liderazgo sindical como jefe de los productores de hoja de coca en la región del Chapare.

Fue la guerra contra las drogas y el circuito de la coca-cocaína que catapultó, en gran medida, a Morales hacia el poder, mientras que las fuerzas de la izquierda política se rearticulaban con un discurso indigenista antiglobalización. La gestión presidencial se ha beneficiado de la economía de mercado, de los precios favorables del gas natural, el petróleo y los minerales. Sin embargo, Bolivia junto a Evo Morales también se relaciona con las incertidumbres sobre cómo posicionarse frente a los nuevos balances de poder. China y Rusia están tratando de instrumentalizar a Bolivia, país que además persiste en la defensa del comunismo tradicional, donde la soledad ideológica conduce al anacronismo y a un encierro junto con Venezuela, Nicaragua y Cuba. Este

artículo interpreta los horizontes contradictorios de estos balances de poder, así como el difícil lugar que le toca ocupar a Bolivia (Ejdesgaard Jeppesen, 2012).

Problemas que motivan escepticismo

El contexto internacional latinoamericano del siglo XXI parece replantear los pilares geopolíticos actuales: control de fronteras para las intensas olas migratorias, protección del orden social interno, desarrollo económico de las naciones y fortaleza militar (Tickner, 2012). No debe descartarse el hecho de que cualquier proyecto diplomático y económico, siempre tiende a caracterizarse por una doble moral y por tácticas de lucha por los balances de poder, detrás de los cuales se están enfrentando las principales potencias como Estados Unidos, la Unión Europea, China y Rusia. En este caso, por balances de poder deben entenderse al conjunto de posturas y estrategias de política exterior de una nación o un conjunto de naciones para protegerse de una serie de amenazas en el entorno anárquico internacional. Asimismo, diferentes estrategias permitirían conectar el aumento del poder estatal mediante la carrera armamentista, las redes de influencia económica, la dominación en los mercados globales y las alianzas entre países fuertes, junto con el cálculo de beneficios que pueden ser aprovechados en función de varias previsiones hegemónicas y geopolíticas en diferentes regiones (Griffiths, 1992).

Cuatro factores fundamentales deben motivar un análisis sobre cómo modificar la política exterior y las políticas de seguridad en tiempos de globalización, con el objetivo de fomentar nuevas estructuras de cooperación y solidaridad para enfrentar los problemas más importantes en la segunda década del siglo XXI. El primer factor se relaciona con la trágica evolución de Haití después del terremoto de principios de 2010. La impresionante devastación movilizó inmediatamente millones de dólares y compromisos para solucionar el sufrimiento indescriptible de miles de ciudadanos, así como para reconstruir un país que nunca estuvo en condiciones de generar estructuras estables y sostenibles en

su desarrollo, junto a la protección básica de los haitianos en materia de derechos políticos, económicos, sociales y humanos.

América Latina trató de ofrecer recursos y apoyo sistemático, aunque la lentitud de las acciones de intervención complicó la reconstrucción, subsistiendo una vez más la idea de considerar a Haití como un Estado fallido y, por lo tanto, irrelevante para el conjunto de mercados globales o prioridades de integración internacionales (Piotrowski, 2010). La cooperación internacional para el desarrollo fracasó casi por completo porque fue innecesariamente burocrática, ineficiente en la logística donde no fue posible privilegiar, antes que nada, las necesidades diarias de los damnificados, al mismo tiempo que rebrotaron las tradicionales previsiones institucionales en cuanto a metas definidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la carrera profesional de influyentes funcionarios, más preocupados por su éxito personal porque se imaginaban a sí mismos como héroes en momentos desastrosos.

Los problemas de la ONU y otros organismos de asistencia, revelaron que Haití se convirtió en un país donde prevalecieron el sometimiento y los intereses políticos de los Estados Unidos que trataron de remodelar un país deshecho, según el formato de las utopías occidentales de una democracia y economía liberales. Así, resultó imposible el ejercicio de la concertación en medio de las calamidades, de manera que los problemas se agravaron con la epidemia de cólera, el rechazo absoluto al trabajo de la ONU y unas elecciones presidenciales realizadas en noviembre de 2010, donde las exigencias de simple participación consciente fueron sobrepasadas por el agobio para sobrevivir, comer y reducir la violencia urbana.

Las gestiones presidenciales de René Preval (2008-2011) y Michel Martelly (2011-2017), condujeron hacia un callejón sin salida en medio de un inmovilismo institucional donde se demostraba una casi absoluta ineficiencia estatal. El presidente Jovenel Moïse (2018-2019) tuvo que enfrentar las acusaciones de un liderazgo débil y corrupto, sobre todo después del escándalo relacionado con la malversación de 3,8 mil millones de dólares con *PetroCaribe* para acceder a petróleo subvencionado desde Venezuela (Fauriol, 2019). El asesinato del ex presidente Jovenel Moïse precipitó a Haití hacia una escalada violenta y anómica frente a la que nadie se atreve a ofrecer soluciones.

Los principales vecindarios de Puerto Príncipe continúan inundados de miedo sobre el futuro, desconfianza hacia la cooperación internacional y rabia reprimida hacia el liderazgo de los Estados Unidos que también está naufragando en su propia reconstrucción económica, pues ni el gobierno de Barak Obama (2009-2018), ni el de Donald Trump (2018-2022) lograron retomar el control para incrementar las fuentes de empleo en forma sostenida y modificar el caos de la desregulación financiera en Wall Street. Los balances de poder parecen intentar un realineamiento en la geopolítica pero también atraviesan por una crisis institucional donde el sistema democrático no está respondiendo adecuadamente para impulsar la equidad, contrarrestar la pobreza y la incertidumbre hacia las posibilidades de efectividad que supuestamente tiene la democracia, en una época donde la inseguridad ciudadana y el temor a las explosiones sociales constantes, deshacen los basamentos más profundos de la confianza en un futuro mejor.

Los modelos sociopolíticos sustentados en la economía de mercado y la democracia presidencial que los Estados Unidos y América Latina vinculan con un régimen de libertades benefactoras, dejaron de ser creíbles y, en algunos casos, resultaron ser inclusive contraproducentes, sobre todo para Haití que, a pesar del dinero recaudado en materia de cooperación para el desarrollo, sigue postrado en la desilusión. Esto estaría desmoronando la buena fe de los cooperantes para el desarrollo, quienes tendrían que abandonar la doble moral de decir una cosa prometiendo maravillas y hacer otra, completamente distinta debido al excesivo poder de los intereses políticos y burocráticos que viene con los países que ayudan.

Los organismos de cooperación de Europa Occidental buscan aplicar sus modos de hacer las cosas, sus formas de ser democráticos y, ante todo, buscan dominar con un mismo molde político cuyos intereses expresan un balance de poder realista que despierta el escepticismo en torno a la solidaridad internacional y la cooperación pacífica e incondicional. Es por estas razones que el eje de los problemas de la seguridad en América Latina, radica una vez más en los programas sujetos a condicionalidades donde destaca, con frecuencia, el abuso de poder de las misiones de cooperación que actúan con un alto sentido paternalista y autoritario (Chomsky, 2007). Una de las manifestaciones contradicto-

rias de los procesos de globalización se expresa en el espíritu más localista de las potencias globales como Europa y Estados Unidos, debido al resurgimiento inusitado del nacionalismo con fuertes características discriminatorias, al mismo tiempo que se disemina un discurso universalista de occidentalización, globalismo de valores y de una aparente ciudadanía global (Mignolo, 2018).

La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos colocó al mundo, en palabras de los expertos como Jeffrey Sachs, Bandy Lee y Ruth Ben-Ghiat, en total “riesgo”, producto de las alucinaciones racistas sobre la supremacía blanca que solamente estimuló los crímenes de odio, de manera que el liderazgo estadounidense ingresó en un deterioro fatal, al mismo tiempo que se están socavando las raíces de la democracia como aspiración global de convivencia y equilibrio político saludable. Ya nada sería creíble cuando se reivindicaban la democracia y un enfoque global de seguridad afincado en balances de poder más justos debido a que Trump estimuló demasiado la xenofobia y el odio hiper-nacionalista (Sachs, 2019).

Los organismos multilaterales de cooperación para el desarrollo están reestructurando sus políticas en función de nuevas lógicas de condicionalidades, donde la seguridad se presenta como un prerequisite geopolítico fundamental: los vientos soplan hacia la necesidad de cumplir ciertas metas en materia de lucha contra el narcotráfico, combate al terrorismo, estabilidad macroeconómica, reducción del tamaño del Estado, control de las migraciones internacionales y compromiso con el apoyo a la democracia representativa. América Latina se alinea alrededor de esta dinámica geoestratégica, aunque de por medio están las dudas sobre la subsistencia del sistema democrático, en medio de los riesgos que, como afirma Francis Fukuyama, conlleva el temor de convertirse en un Estado fallido, incluidos los Estados Unidos, debido a una degradación de la democracia a favor de los más ricos y en detrimento del aumento constante de las desigualdades sociales y económicas, lo cual agrava las tensiones sobre la inseguridad y el desorden político (Fukuyama, 2017).

Es aquí donde la experiencia boliviana se convierte en un segundo factor de análisis, ya que emergió como un raro ejemplo de éxito relativo de las reformas de mercado y, posteriormente, como un fenómeno

de resistencia y condena en contra de los efectos del neoliberalismo en América Latina. Bolivia puso en práctica todas las recomendaciones del denominado Consenso de Washington durante los años noventa, llevando a cabo la reducción del tamaño del Estado, las políticas de privatización y desarrollando una confianza excesiva en torno a las bondades de los efectos de derrame del mercado, como la receta privilegiada del crecimiento económico. Sin embargo, dicho crecimiento no llevó a una convergencia de ingresos entre las clases sociales donde predominó la discriminación, desigualdad, exclusión y los patrones de racismo.¹ Estos problemas desembocaron en la desconfianza absoluta hacia el modelo de “desarrollo neoliberal”, imposibilitando una reducción significativa de la desigualdad. Bolivia mostró que no era suficiente el crecimiento económico sobre la base de una economía de mercado global, sino que también era necesaria la activación de varias políticas públicas enmarcadas dentro del Estado de Bienestar. Las ofertas populistas de Evo Morales y los detractores de la globalización, rápidamente se convirtieron en el caldo de cultivo para un retorno del Estado como actor económico y en una crítica mordaz hacia la democracia representativa.

El ex presidente Evo Morales, desde muy temprano en su gestión gubernamental en el año 2006, difundió una estrategia internacional

¹ La experiencia boliviana en materia de erradicación de la pobreza es decepcionante. Aún a pesar de los esfuerzos para modernizar el aparato productivo y articular la economía al sistema global, junto con la ejecución de reformas de mercado, los indicadores de pobreza siempre fueron preocupantes. Entre 1999 y 2005, el porcentaje de la población pobre llegaba al 63 por ciento, lo cual significaba cerca de 5.512.721 personas pobres. Con la llegada al poder de Evo Morales, el Producto Interno Bruto (PIB) saltó de 9.574 millones de dólares en el año 2005, a 40.500 millones de dólares para el año 2018 (un aumento de 4,5 veces), aunque no hubo una reducción significativa de la desigualdad y la pobreza. Para el año 2011, la pobreza se redujo a 46 por ciento (4.880.631 pobres). La desigualdad, desde el punto de vista del Coeficiente Gini que mide el grado de concentración de la riqueza, mostró cifras alarmantes: 0,63 para 1999; 0,70 para el año 2000; 0,65 en 2001; 0,59 en 2005 y 0,47 para el año 2012. Esto significa una reducción lenta, inestable y precaria de la desigualdad, aun a pesar del crecimiento económico. Este deterioro e incertidumbre sobre el mercado y los desafíos del mundo globalizado, hicieron que la sociedad busque diversas salidas para remontar la desigualdad, como las formas de sobrevivencia de la economía informal, donde destaca el narcotráfico, el contrabando y la erosión de las instituciones estatales para escapar a cualquier regulación.

denominada “diplomacia de los pueblos”, mediante la cual apoyó la doctrina del socialismo del siglo XXI, alineándose con Hugo Chávez en Venezuela, Raúl Castro en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua. De esta manera se materializó el giro a la izquierda que representó un rechazo a la democracia liberal, en nombre del socialismo. Esta posición fue expresada como una visión anti-imperialista y defensora de la soberanía a cualquier precio, sobre todo al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA). Bolivia apoyó de manera ambigua la Carta Democrática Interamericana, reforzando así las críticas de izquierda antidemocráticas que empezaban a calar hondo en varios sectores de la sociedad civil.

De acuerdo con el Latinobarómetro, la conocida encuesta de opinión pública anual aplicada en 18 países de la región, la confianza en los gobiernos cayó de 45 por ciento en 2009 a 22 por ciento en 2018, mientras que la cantidad de personas descontentas con la democracia aumentó de 51 a 71 por ciento, junto con la acentuación del miedo a la violencia, la inseguridad y una mayor desconfianza hacia las fuerzas armadas y la policía (Latinobarómetro, 2018). Estas características hacen que sea mucho más difícil que América Latina impulse una sólida estrategia de seguridad con criterios de cooperación y ambiciones más definidas en la globalización, debido precisamente a que el proyecto sobre un exitoso orden liberal internacional prácticamente habría fracasado, producto de la vulnerabilidad a la corrupción, la inestabilidad económica y política, y una retórica liberal que oculta prácticas constantemente autoritarias. Estas condiciones desembocan en un tipo de relacionamiento ambiguo con China que, en múltiples casos, es vista como una tabla de salvación para preservar la soberanía estatal, o fomentar un nuevo tipo de imperialismo a través de la introducción de su monopolio económico; mientras que, en otros casos, China es juzgada con desconfianza y temor (Long, 2018).

El tercer factor de problemas y anarquía internacional tiene que ver con la lógica del balance de poder desarrollado por China, India, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia en materia de control de armas nucleares. Ninguno de estos países hace algo definitivo para moderar los riesgos de una crisis y confrontación bélica, sobre todo cuando se analizan los conflictos entre Corea del Norte y el Sur, Siria, Irak, Irán

o la sorpresiva invasión de Rusia en Ucrania. Los conflictos en Venezuela, han hecho que China afiance sus instalaciones para el rastreo de satélites en la Base Aérea Capitán Manuel Ríos. A esto se agrega que Rusia también tenga una tecnología cibernética instalada en la Base Naval Antonio Díaz Bandi en La Orchilla, una isla al norte de Caracas.

El efecto desestabilizador que emana de Venezuela, se articula con Nicaragua, Cuba y Bolivia. De hecho, la situación boliviana es clave en el apoyo a Venezuela, tanto para el reforzamiento de un discurso ideológico que identifica a los Estados Unidos con la única causa del desastre económico-político venezolano, como para atraer la influencia de otras potencias que compitan con la hegemonía americana. Si bien el viejo esquema de la Guerra Fría, de choque entre el mundo liberal democrático y el mundo comunista desapareció, países como Bolivia reivindican una aparente idea anti-imperialista para replantear los problemas de la dependencia, desde el punto de vista de una soberanía irrenunciable de los Estados latinoamericanos (Ceppi, 2014).

Este discurso, convincente para la gran mayoría de las masas de poca educación sobre la soberanía estatal, es aprovechado por China, Rusia e inclusive por Irán para tener una mayor influencia en América Latina. Bolivia, como cófrade de Venezuela, no agrega mucho al rediseño de los balances de poder, ni tampoco afianza la ideología comunista; sin embargo, refuerza una percepción anticolonialista de no intervencionismo y relativa autonomía que todavía es muy fuerte en la región (Mignolo, 2012). Bolivia fue el país que con mayor vehemencia se opuso a que la OEA emita cualquier pronunciamiento negativo o sanción en contra de Nicolás Maduro; asimismo, condenó toda crítica de la OEA en contra de la reelección indefinida de Evo Morales, especialmente después de las elecciones fallidas en octubre de 2019 donde la OEA encontró serios indicios de fraude.

Bolivia también estuvo cultivando relaciones exteriores con Irán desde el año 2009, de manera que se abrieron algunos canales de cooperación económica con el financiamiento de plantas industrializadoras de leche, aunque de por medio está la posibilidad del suministro de material radiactivo como uranio (Martínez, 2010). El objetivo sería socavar, a cualquier precio, el cada vez más deteriorado liderazgo hegemónico estadounidense (Lavie, 2009). Los acuerdos de cooperación entre Bolivia

e Irán llegan a 1.100 millones de dólares, mientras que China se convirtió en uno de los más importantes acreedores para el Estado boliviano, llegando a colocar una deuda de 5 mil millones de dólares, además de conseguir grandes privilegios para obtener contratos con el Estado en materia de explotación minera, construcción de carreteras y asesoramiento para mejorar la seguridad interna con la fuerza pública boliviana (Ellis, 2016). La triangulación entre Rusia, China e Irán sería un programa secreto que Bolivia tiene para recuperar cierta capacidad de acción en contra los Estados Unidos, en la medida en que Venezuela y Cuba estarían ingresando en un estancamiento político en el ámbito global.

Los peligros provenientes del contrabando de materiales nucleares, armamento y tecnología para la guerra, hicieron que las embajadas de China, Estados Unidos y Rusia, enlacen lo más importante de su política exterior a los intereses de defensa que ponen en vilo al conjunto de la humanidad. Las embajadas mezclan constantemente las tácticas geopolíticas, con las previsiones de no proliferación de armas nucleares, aunque al mismo tiempo intentan mantener un único fin: un balance de poder favorable y eficaz a sus intereses económicos que segmenta el orden internacional con países de primera calidad y otros de segunda. De hecho, a los pocos días de haber sido elegido Jair Bolsonaro como presidente de Brasil en octubre de 2018, se dio a conocer que existiría la posibilidad de negociar con Estados Unidos el acceso a una parte del territorio brasileño para instalar una base militar.

Aquí es donde Bolivia ha ganado cierto terreno a su favor, con el argumento de superar la dependencia e injerencia de los Estados Unidos, expulsando a la Drug Enforcement Administration (DEA) y reorientando la cooperación internacional de la lucha contra el narcotráfico hacia la Unión Europea. El país andino considera que la soberanía boliviana habría vencido el prejuicio de ser tratada como una nación mendiga, sometida a la supremacía anti-imperialista. Sin embargo, la economía de la coca, difícilmente ha superado uno de sus principales obstáculos: el problema de los circuitos de producción de cocaína que han logrado conquistar importantes núcleos de poder económico, lo cual agrava múltiples aspectos de la seguridad internacional en la guerra contra las drogas de Sudamérica (The Economist, 2018).

Bolivia está tratando de mantener un difícil equilibrio entre una relación distante con los Estados Unidos, y la apertura flexible con aquellos países que promueven una globalización multipolar, aunque en materia de narcotráfico y trata de personas, las acciones bolivianas muestran resultados ambiguos: erradicación de cultivos de coca en medio de conflictos políticos y debilidad institucional para controlar situaciones donde las fuerzas policiales neutralizan una acción más decidida para castigar la trata de personas, sobre todo por las vinculaciones entre algunos efectivos policiales y el crimen organizado.

La apuesta de política exterior boliviana se alineó con Cuba y Venezuela, suponiendo que esta estrategia vendería mejor la imagen de Evo Morales como el gran líder indígena que acaudillaba un verdadero “proceso de cambio”. Sin embargo, esta estrategia fue sólo un intento incompleto por romper con los Estados Unidos. Cuando Bolivia expulsó al embajador estadounidense, Philip Goldberg en el año 2008, así como cuando cortó todo lazo con la Agencia de Cooperación al Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), la postura boliviana giró en torno al multilateralismo, impulsando el debate de problemáticas que son parte de la política doméstica al interior de las Naciones Unidas, como ser: la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, la lucha contra la privatización de los servicios básicos y la despenalización de la hoja de coca. La ruptura con Estados Unidos fue ambivalente y parcial porque el mismo gobierno de Morales está consciente de que la inversión extranjera directa y la posibilidad de integración amigable con la hegemonía americana, favorecerá la estabilidad económica y algunas ventajas comerciales en el mediano plazo.

Al enfrentarse con los Estados Unidos, Bolivia articuló sus balances de poder con China, Rusia, Venezuela y Cuba, aunque nunca estuvo claro cuánto podía ganar efectivamente en términos económicos, militares y en materia de seguridad. Los intercambios comerciales son mínimos pero la ideologización antioccidental y antiamericana ha ido creciendo, junto con el deterioro de la democracia institucionalizada. Aquí, Bolivia intenta convencer a sus seguidores nacionales e internacionales que la alternancia en el poder y la no reelección de Evo Morales, son solamente criterios occidentalizados y contrarios a los intereses de las grandes

masas y de la nación que debería seguir enfrentando las amenazas del imperialismo (Brandon y Gray, 2015).

La no proliferación de armas nucleares, la violencia de la guerra contra las drogas y las pugnas geopolíticas que están impulsando China y Rusia en América Latina, tiene un trasfondo geoestratégico bien definido: no abandonar el balance de poder donde los intereses de cualquier Estado son protegidos a partir de la fortaleza militar (The Weapons of Mass Destruction Commission, 2006). El hecho de no renunciar o no limitar toda carrera armamentista, tampoco facilita un control más eficaz de los productos nucleares, del narcotráfico y del crimen organizado, sino que fomenta una concepción utilitarista y pragmática de las potencias como Estados Unidos, China o Rusia, poniendo en duda un sistema internacional más igualitario y pacífico.

En el área andina, Bolivia tiende a ser el país que de alguna manera ha posibilitado una presencia más notoria de China e Irán. El objetivo se concentra en profundizar el debilitamiento de la hegemonía estadounidense, antes que en la posibilidad de construir una nueva red de cooperación e integración multipolar. El discurso antiestadounidense favorece la reducción de cualquier influencia para el control de las plantaciones de hoja de coca, así como para desafiar la presencia de Europa y el Occidente, calificada como neocolonialista. Bolivia logró explotar muy bien las relaciones comerciales con China, Irán y Rusia, pero solamente para limitar al máximo las influencias americanas en la guerra contra las drogas.

Lo mismo puede decirse de las actuaciones bolivianas al interior de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y UNASUR, donde primó un enfoque ideológico de férrea defensa del socialismo del siglo XXI y, posteriormente, de protección de Venezuela y el chavismo, como estructura política para preservar la lucha de balances de poder a favor de una supuesta confrontación que tenga el propósito de resistir la dependencia del neoliberalismo y los efectos perversos de la globalización económica. Estas acciones colocaron a Bolivia en una situación delicada cuando le tocó presidir UNASUR en el periodo 2018-2019. Hubo una salida masiva de países que en algún momento prometían un tipo de integración importante. Al final, Bolivia se quedó sola con Surinam, Guyana, Uruguay y Venezuela.

El presidente Evo Morales, al no poder recomponer la estabilidad de UNASUR, viajó a Caracas en enero de 2019, tanto para expresar su apoyo a Nicolás Maduro, como para reunirse con el Ministro de Defensa iraní, Amir Hatami. Frente a la crisis venezolana, los desequilibrios y balances de poder han estado expresándose por medio del reclamo para la penetración más decisiva de los intereses chinos, rusos e iraníes. La política exterior boliviana, sin embargo, muestra un devaneo pragmático para encontrar aliados que ratifiquen la destrucción de la hegemonía americana en la región (Morales, 2016).

Bolivia y su demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Si bien el refrán “no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista” es muy conocido, tiene que reformularse para analizar el conflicto entre Bolivia y Chile sobre el problema marítimo. Desde que Bolivia perdió la Guerra del Pacífico en 1879, el conjunto de diversos tratados para recuperar un acceso al mar, ha caído en un sinnúmero de callejones sin salida. La invasión chilena fue injusta, sangrienta y arrastró una cadena de animadversiones que se prolongan hasta el siglo XXI.

Con la demanda marítima presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para reencauzar las negociaciones, Bolivia abrió un escenario interesante pero no por ello exitoso. Todavía resta mucho camino por recorrer y no se pudo convencer que el escenario de los balances de poder actuales, debían “obligar a Chile” a negociar. Tampoco se pudo generar un entorno internacional favorable a la posibilidad de ceder territorio porque hay una enorme probabilidad de hostilizar demasiado el futuro de los acercamientos diplomáticos.

De hecho, Chile rechazó siempre la demanda marítima, primero cuestionando la competencia de la CIJ para reflexionar y actuar sobre el conflicto relacionado con la salida al mar con soberanía para Bolivia; y segundo, procediendo de manera amenazante porque las relaciones con Chile son muy desiguales, tanto desde el punto de vista económico, como militar. Bolivia está frente a un dilema muy complejo y la deman-

da ante la CIJ tuvo consecuencias de doble filo. La CIJ falló a favor de Chile y dejó a Bolivia con un trago amargo, sin poder reaccionar frente a los balances de poder desiguales. China, Irán, Rusia y Venezuela tampoco se expresaron claramente para dar un apoyo estratégico, ni para ofrecer alternativas comerciales o financieras que hagan menos traumática la derrota boliviana ante la CIJ.

La efectividad de una negociación internacional, siempre se mide sobre la base de los resultados logrados con miras hacia una solución aceptable para las partes en disputa. En el caso de Bolivia y Chile, los problemas se complejizaron demasiado con los resultados del Referéndum sobre el Gas del año 2004. Este hecho marcó una señal muy fuerte en la mentalidad chilena, en términos de un nacionalismo boliviano que se negaba a considerarlos como opción bilateral confiable. Bolivia se negó a la exportación de gas por Chile, creando una resistencia inmediata que despertó mayores susceptibilidades.

¿Cuáles fueron las reacciones chilenas, durante el proceso judicial en la CIJ y luego de ganar el fallo a su favor? Las autoridades se mostraron muy cautas, pero simultáneamente expresaron un sentido de superioridad y sutil desprecio por Bolivia, aunque algunos discursos del ex presidente Ricardo Lagos y la prensa chilena, poco a poco reforzaron también una actitud nacional-defensiva al estilo de los Estados dominantes que no se dejan intimidar ante nada. Chile se sabe fuerte, protegió su soberanía territorial y consideró siempre a Bolivia como un enemigo “latente” que le cierra las puertas por medio de presiones con la venta del gas y el acceso a otras fuentes de energía como el agua.

A pesar del fallo de la CIJ, las posibilidades de negociación bilateral entre Chile y Bolivia no se agotaron, aunque continúan los constantes choques. Sin embargo, una reorientación útil y estratégica para las reivindicaciones bolivianas es precisamente el análisis de los impactos y las recomendaciones que los diplomáticos chilenos identificaron luego del Referéndum de 2004. El problema del sistema hídrico Silala que pertenece a Bolivia, reabre otro frente de batalla donde los estrategas bolivianos se mostraron demasiado suaves y condescendientes en el periodo 2014-2022. Probablemente ahora debe incorporarse otro conjunto de paquetes de información estratégica relacionados con la “crisis energética” chilena, especialmente la demanda de agua. Bolivia tendría que

ser más exigente con Chile respecto al Silala. Sin embargo, tampoco se puede dejar de lado otras formas de cooperación y acercamiento, por ejemplo, en materia de recursos humanos.

Bolivia y Chile podrían tranquilamente intercambiar profesionales con la finalidad de ir mejorando progresivamente las relaciones a través de la construcción de canales multidisciplinarios de comunicación intercultural, científica, técnica y experiencial. Esto no significa que deban implementarse formas sutiles de espionaje, sino todo lo contrario: aprovechar las buenas condiciones de educación de alta calidad que, por ejemplo, Chile posee, lo cual también serviría para fortalecer a los profesionales bolivianos. Por contrapartida, la apertura de puertas en Bolivia para mejorar la imagen de los chilenos en el territorio nacional, representaría una opción cooperativa necesaria.

En el periodo 2004-2010, la negociación bilateral fue ineficiente y con altas dosis de incoherencia. Una pauta realista fue observar cómo Bolivia comenzaba algunos conflictos abiertos, incentivando la opinión pública nacionalista. La declaración del presidente Evo Morales en marzo de 2011 para iniciar un proceso contencioso ante la CIJ, con el fin de forzar una solución a la demanda marítima, no fue sorpresiva para Chile que utilizó dicha noticia como un dato más de ruptura en la construcción de los procesos de confianza.

Es probable que el “relacionamiento cooperativo” de mutua convivencia y reconocimiento: de chilenos hacia Bolivia y de bolivianos hacia Chile, vaya reduciendo los bloqueos mentales hiper-nacionalistas. Así, el constante acercamiento construirá puentes históricos de respeto y reconocimiento. El conflicto marítimo desde 1879 es uno de los pocos en el mundo donde el nacionalismo terminó convirtiéndose en la neurosis de los individuos: reacciones intolerantes y ambiguas que cultivan la intolerancia, distorsionando el análisis de soluciones con justicia.

El primero de octubre de 2018 se produjo el fallo de la CIJ. Fue como un balde agua fría en contra de Bolivia. No se pudo lograr una resolución del conflicto marítimo en términos pacíficos y justos, aunque predomina un sistema internacional donde destaca la interdependencia. Chile depende de Bolivia, así como Bolivia depende de Chile. Por lo tanto, la visión debería concentrarse en enfrentar el conflicto desde la perspectiva del reconocimiento de mutuas responsabilidades interna-

cionales, dejando de lado la demagogia, el egoísmo, la electoralización del problema, y sobre todo reposicionando la alternativa del canje territorial.

La demanda presentada ante la CIJ fue una decisión estratégica que movilizó intensamente a todo Chile y a los mismos bolivianos porque puso de manifiesto que era posible llevar el conflicto histórico a un ámbito internacional donde Bolivia se arriesgaba, primero a tensionar las relaciones con Chile, sabiendo que los acercamientos podrían complicarse, y segundo, Bolivia pensó en obtener un fuerte apoyo internacional, ganando un espacio que ningún otro gobierno previo se atrevió a lograr. Sin embargo, desde un primer momento, la opinión pública y la sociedad boliviana tenían dudas sobre la efectividad real del proceso judicial después de la presentación de la demanda. En el momento en que ésta fue aceptada por la CIJ, colocándose por delante de Chile que impugnó la competencia de la CIJ para aceptar dicho juicio, entonces la confianza de la población boliviana aumentó hasta ser utilizada por Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS), con la finalidad de fortalecer el liderazgo presidencial y otras previsiones electorales en el corto plazo.

Al mismo tiempo, la sociedad civil siempre se preguntó ¿por qué el gobierno de Evo Morales presentó la demanda y no otros?, ¿cuáles fueron las razones por las que otros presidentes y gobiernos no tomaron similar iniciativa? Al responder esta pregunta hay un sinnúmero de argumentos que agrandaron la imagen de Evo Morales, aunque existen dudas sobre si la idea de presentar una demanda nació del presidente o solo fue un momento de envalentonamiento que terminó en un éxito relativo cuando la demanda fue finalmente aceptada por la CIJ.

Después de cinco años (2013-2018) se pudo evaluar cuidadosamente todo el proceso. Desde la aceptación de la demanda, no hubo un mejoramiento en el diálogo y acercamiento con Chile, aspecto que es negativo, en la medida en que tanto Bolivia como Chile deben necesariamente negociar en igualdad de condiciones, buena fe y voluntad para encontrar algunas alternativas de solución duraderas. La derrota de Bolivia, le exige persistir en un acercamiento, inclusive a pesar de lo indigno que representa el hecho de doblegarse ante el más fuerte en medio de los balances de poder.

Tanto Bolivia como Chile llevaron adelante el proceso en medio de una serie de cálculos políticos que no necesariamente beneficiaban a la posibilidad de un acuerdo negociado. Ambos países exaltaron el nacionalismo y un exitismo exagerado, sobre todo cuando pusieron de por medio el concepto y la eficacia política de la “soberanía”. Este aspecto es central: llámese acceso al mar para Bolivia con soberanía, o defensa del territorio chileno con plena integridad territorial, sin ceder ni un solo milímetro.

En consecuencia, ni Bolivia ni Chile utilizaron el proceso ante la CIJ para reconducir sus relaciones hacia un rumbo más cooperativo y auspicioso. Actualmente, es posible que exista mayor desconfianza entre uno y otro país, junto con el reforzamiento de la intolerancia. El proceso ante la CIJ no abrió una nueva era para las relaciones entre Bolivia y Chile, algo que estos países ya no podrán cambiar, pero se espera que estén listos para demostrar a la comunidad internacional que es posible una salida madura e históricamente emblemática para terminar un conflicto secular que, en el siglo XXI, inevitablemente deberá resolverse.

Bolivia recibió un golpe duro con la sentencia de la CIJ que favoreció a Chile. Éste no está obligado a negociar nada sobre el acceso al mar, pero Chile aún debe responder con mayores ventajas para la exportación de las mercancías bolivianas por los puertos chilenos. El problema de la soberanía no será resuelto, esto está claro. Al mismo tiempo, el fallo es un antecedente para evitar que la demanda presentada por Bolivia sea utilizada en el futuro como un caso de jurisprudencia, donde sea posible modificar tratados y conflictos limítrofes a través de juicios, donde la publicidad y la discusión internacional se conviertan en un altavoz muy influyente.

El resultado negativo para Bolivia evitó también que éste no sea manipulado con una excesiva politización. Evo Morales utilizó la demanda marítima, en función de fortalecer su liderazgo para asegurar su reelección indefinida como presidente. Los balances de poder internacionales, fueron interpretados por Morales como un recurso cortoplacista, en función de sus intereses políticos domésticos. El fallo de la CIJ a favor de Chile, obliga a mirar el largo plazo y las responsabilidades históricas para las nuevas generaciones, en función de hacer justicia y ejercer la práctica de la equidad entre dos democracias que pacíficamente nego-

ciarán soluciones. Entre éstas aún está vivo el probable canje territorial y la mutua interdependencia para que Bolivia y Chile puedan complementarse.

Un aspecto sí es definitivo. El fallo de la CIJ mostró que ningún régimen internacional podrá nunca decir que Chile devuelva lo que fue el Litoral boliviano y, por lo mismo, Bolivia sigue atada a un país mucho más poderoso. Depende de Bolivia vencer a Goliat sin la CIJ, de manera que la demanda, en resumen, no tiene la trascendencia que inicialmente se había pensado porque es Bolivia y su propia fuerza estatal, quienes tendrán que jugar un papel fundamental en las negociaciones con Chile después de la demanda presentada ante La Haya.

Globalización e inseguridades

La proliferación de intensas revueltas sociales que van desde Santiago de Chile, Atenas, Madrid, Nueva York, Caracas, Río de Janeiro, hasta El Cairo o Trípoli, junto con la completa insatisfacción de los jóvenes ante el desempleo, la falta de oportunidades de vida y una jerarquización internacional de economías exitosas y mercados emergentes, demanda una nueva estructura universal de armonía e integración con solidaridad en el ámbito global.

Tanto China como Estados Unidos tendrían que contribuir a la integración y a la negociación pacífica de Corea del Norte, a su desarrollo y a la eliminación de la zozobra reduciendo, por igual, todos los arsenales nucleares en Oriente y Occidente. La comprobación vergonzosa de la inexistencia de armas de destrucción masiva en Irak, debió servir como lección para impulsar nuevas formas de negociación con Irán, reconociendo que la mayoría de los países árabes advierten el peso iraní como determinante, tanto para el éxito económico del mundo islámico, como para construir diferentes tendencias de integración político-religiosa en el Medio Oriente.

Una probable invasión militar en Irán para dismantelar su programa nuclear, rompería cualquier posibilidad de Estados Unidos para preservar su imagen como una potencia benevolente y liberal-democrática,

de tal manera que su política exterior resultaría demasiado dura, con lo cual su poderío también seguiría decayendo. El escenario actual se complejiza todavía más, debido a que las visiones del ex presidente Donald Trump fomentaron mayores riesgos de intervenciones militares, a partir de suposiciones que apuntaban hacia una globalización más inestable en materia de seguridad y nacionalismo occidental blanco-americano (Seligman, 2018).

El éxito económico alcanzado por China, la colocó por encima de Norteamérica y Europa; por lo tanto, ahora será fundamental un aporte chino al restablecimiento de los equilibrios en Corea del Norte y al aumento de iniciativas con mayor fraternidad internacional, en materia de comercio justo y compromisos para preservar el medio ambiente o los esfuerzos para combatir el calentamiento global. Pero la represión y el autoritarismo del sistema político en China, constituyen una hegemonía de viejo cuño, totalmente contradictoria con las perspectivas de apertura económica e integración globalizada con criterios de una mayor equidad.

Pensar en un conjunto de cambios necesarios en los balances de poder, tiene que ver con el surgimiento de nuevas estrategias de justicia socioeconómica y un orbe internacional más pacífico. Aquí destacan con fuerza la erradicación de la pobreza y las Metas del Milenio. El África Subsahariana y varios países de América Latina como Bolivia, Haití, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, probablemente no lograrán alcanzar algunas metas para reducir la mortalidad materna e infantil hacia el año 2030, o el establecimiento de armazones económicos cuyo objetivo sea mantener fuentes de empleo estables, ligadas al incremento de los niveles de ingreso digno (United Nations, 2015).

La lucha contra la pobreza, en medio de un sistema internacional de equilibrios inestables y aspiraciones globales a un aumento de la riqueza mundial, expresa un nuevo tipo de exigencias. No se puede condicionar el hecho de vencer la pobreza, a otras políticas o intereses estratégicos para doblegar gobiernos, sino que se necesitan, en todo caso, mayores esfuerzos de cooperación (Clark, 2012; Ellis, 2016).

De cualquier manera, en América Latina los balances de poder relacionados con los Estados Unidos, buscan siempre erradicar la economía de plantaciones de coca, a cambio de mercados para distintos productos

de Bolivia, Perú y Colombia. Asimismo, la integración latinoamericana está dividida, debido a la probable invasión militar y el elevado número de víctimas civiles que podría tener lugar en Venezuela. Aquí, las promesas de una modernidad occidental ligadas a mejores condiciones económicas de cooperación para el alivio a la pobreza, presentan un arma de doble filo: por un lado, una mayor subordinación de Venezuela a los Estados Unidos, y por el otro, la permanencia de tensiones en toda la región, debido a que América Latina ganaría mucho más si impulsa una concepción de interdependencia y apertura hacia el Asia (sobre todo China e India).

Las tendencias de una probable explosión demográfica en el África e India para el año 2050, además de la reducción de fuentes de abastecimiento de agua, campos fértiles para la agricultura intensiva y las consecuencias negativas del cambio climático — cuyos efectos serán catastróficos en caso de no reducirse la cantidad de emisiones de gases con efecto invernadero — exigen que cualquier discusión sobre los balances de poder, sea reorientada hacia un orden internacional más humanizado. La guerra contra el terrorismo, el militarismo desde una diplomacia preventiva y la preservación de concepciones neocolonialistas, son siempre demasiado violentas, costosas y autodestructivas (Krasner, 1999).

El siglo XXI demanda transformar la doble moral y el predominio de estructuras hegemónicas represivas, con la finalidad de lograr una visión orientada hacia el cultivo de una sociedad internacional, capaz de contrarrestar las amenazas de su extinción por indiferencia, irresponsabilidad y por políticas exteriores que desprecian la solidaridad junto con la cooperación (Buzan, 2004). El sistema internacional en América Latina tendría que evolucionar más allá de las luchas entre hegemonías intransigentes que hasta el momento siguen reproduciendo Estados Unidos, China, India y Rusia.

En el caso de Bolivia, el régimen de Evo Morales se presentó como el ejemplo del giro a la izquierda que aparentemente sobrevivió en mejores condiciones, a diferencia de Venezuela y Nicaragua. Promocionó muy bien su modelo de desarrollo de “economía social comunitaria y productiva” que se sustentó en la economía extractivista del gas natural, petróleo y minerales. Los precios internacionales de estas mercancías sirvieron a Morales como el combustible para implementar políticas so-

ciales por medio de la entrega de bonos, el aumento del gasto público en infraestructura de todo tipo y la fundación de empresas estatales que van desde la producción de hidrocarburos, hasta fábricas de papel, azúcar, miel, almendras y hierro. Sin embargo, su economía del conocimiento es débil y anacrónica, debido a una débil estructura educativa, tanto en las escuelas como en universidades.

Paralelamente, Bolivia vendió una imagen como víctima del capitalismo y el neoliberalismo, pero no logró abrir un horizonte internacional de negociación más flexible, pluralista y condescendiente con varios actores. El sectarismo ideológico comunista, hizo que Bolivia optara por Irán, Venezuela, Cuba, Turquía y China, incluso sabiendo que estas relaciones iban en contra de la tradición democrática expresada por Bolivia desde 1982.

En la actualidad, los balances de poder están aislando al país andino, cuya economía es tan pequeña que las inversiones y proyectos con China o Irán, se caracterizan por la explotación y abusos de la fuerza de trabajo, así como por la erosión de las instituciones estatales debido a la corrupción. China, después de conocer el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Bolivia, prefirió utilizar un realismo absoluto, al escoger a Chile como un punto nodal (*hub*) para iniciar negocios, inversiones y apertura de mercados de gran escala en toda América Latina (Reuters, Business News, 2019).

Bolivia, sin embargo, sigue impulsando la lucha internacional por defenestrar a los Estados Unidos, lo cual está ligado a la guerra contra las drogas. Si bien creció un consenso en torno al fracaso de esta estrategia (Cardozo, *et al.*, 2011), Bolivia generó importantes acuerdos para despenalizar la hoja de coca, calificada como un símbolo y recurso ancestral que merece ser protegido de las formas de dominación neocolonial. Al expulsar a la DEA estadounidense, Bolivia consiguió la cooperación de la Unión Europea, organismo que no ha sido tan exigente ni violento como las fuerzas norteamericanas. Sin embargo, la ideologización de la defensa ancestral de la hoja de coca se convirtió en una cortina de humo, aprovechada para politizar todavía más este problema dentro de los balances de poder. Venezuela utilizó las redes de articulación entre la producción de coca, cocaína y penetración política de influencias como el Hezbolá iraní, según atestigua *The New York*

Times, expresando una directa vinculación entre el ex vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y algunos cárteles de la droga junto con grupos de Hezbolá (Casey, 2019). Estos elementos generan un conflicto difícil de afrontar y enreda mucho más la resolución de la crisis venezolana, debido a que Rusia está aliada con Irán para liquidar cualquier intervención de los Estados Unidos.

Reformas inciertas y posneoliberalismo

América Latina enfrenta una disyuntiva: continuar impulsando la integración hacia los mercados mundiales, o reestructurar sus prioridades políticas en función de una agenda caracterizada por la resistencia y las exigencias de mayor justicia, similares a las críticas del movimiento antiglobalización. Esto es lo que condujo a la región hacia los debates en torno al posneoliberalismo puesto que otro de los problemas que la globalización hizo rebrotar es la polarización de los pobres contra los ricos, lo cual revitalizó el denominado populismo, así como las pugnas entre las posiciones políticas de izquierda versus derecha, sobre todo por el desprestigio y la desconfianza hacia la economía de mercado que América Latina experimentó en los comienzos del siglo XXI (Klein, 2008).

El mercado agrandó la concentración de la riqueza en manos de las élites económicas y políticas, sembrando el terreno para la intervención de liderazgos mesiánicos que ofrecieron revoluciones sociopolíticas como las campañas desafiantes de Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia. Este tipo de líderes fueron transformándose en la bandera de lucha para cuestionar lo poco que se había construido en materia de cambios productivos, competitividad y estabilidad de la democracia (Stiglitz, 2012). En estos casos, el populismo funcionó como un tipo de carisma movilizador de las masas enardecidas por la desigualdad, generándose fuertes demandas para tener políticas redistributivas. Las discusiones sobre el posneoliberalismo, han hecho que la economía de mercado sea equiparada con una maldición global, frente a la cual existirían pocas alternativas de cambio (Metcalf, 2017). Actualmente, el continente parece encaminarse hacia una época donde los esfuerzos por

llevar adelante diferentes tipos de reformas, se encuentran frente a un futuro lleno de incertidumbres.

Si reflexionamos con cuidado cuáles fueron las condiciones de re-instalación de la democracia en América Latina a principios de los años ochenta, tenemos que destacar cinco aspectos. Primero: el fin de las dictaduras de ninguna manera rompió completamente con la cultura autoritaria, ni tampoco con la debilidad institucional de los Estados. Segundo: la modernización económica por medio de las políticas de libre mercado, tuvo resultados abiertamente contradictorios en su relación con la democracia, debilitándola en unos casos, o simplemente impulsando una relación negativa entre el sistema democrático y la persistente desigualdad (Collins, 2019). En tercer lugar, la situación particular de Centroamérica muestra una fragmentación política donde el final de las guerras civiles y la implementación del ajuste estructural, tampoco dieron origen a un modelo específico de consolidación democrática. Cuarto: existe un gran déficit de liderazgo donde los partidos tradicionales o nuevos, e inclusive las organizaciones de la sociedad civil, no pueden mostrar el impulso de líderes jóvenes con plena vocación democratizadora. Finalmente, el quinto factor se relaciona con la imposibilidad de construir una “gran teoría” en América Latina, tanto para comprender la sociedad como un todo, o para identificar opciones de transformación política, económica y cultural.

La descomposición de los gobiernos dictatoriales al final de los años ochenta vio el agotamiento de un tipo de Estado autoritario que había dejado de responder a las necesidades del desarrollo, manteniendo en la pobreza a millones de personas y fracasando en la construcción de un nuevo orden social y político para tener Estados fuertes o plenamente soberanos. Las diferentes dictaduras en Argentina, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil señalaban que era imposible seguir adelante sin la existencia de nuevos procesos de legitimidad, participación de la sociedad civil, pero sobre todo sin la posibilidad de regresar a un escenario con pacificación para llevar adelante los sueños de la modernización y el desarrollo económico.

El modelo dictatorial de la modernización, vigente entre los años sesenta y ochenta, desapareció aunque permaneció impasible un conjunto de aspiraciones al desarrollo, todavía ligadas con factores autoritarios;

es decir, patrones de conducta que trataban de imponer las decisiones por la fuerza, considerando que la movilización violenta es una constante del orden político (Passi Livacic y Martines Belieiro Jr., 2018).

Desde una mirada puesta en el siglo XXI, el final de las dictaduras no significó exactamente la fundación de sociedades verdaderamente democráticas, razón por la cual el análisis de las reformas políticas y el éxito económico, todavía plantean los siguientes problemas: ¿por qué persisten el autoritarismo y las debilidades en el Estado para ser respetado como institución soberana, tanto dentro de los países como en el contexto internacional de la globalización?

El concepto mismo de reformas políticas tuvo una evolución que fue transformándose desde una óptica estrictamente pragmática: terminar con las dictaduras y ejecutar elecciones, hasta avanzar a situaciones más complejas donde es fundamental reformar las prácticas políticas, las instituciones estatales en su funcionamiento cotidiano, e inclusive reformar los horizontes de cambio en el largo plazo, donde la democracia como un conjunto de procedimientos o la función privilegiada de los partidos políticos, debe enfrentar otras opciones de reforma, destacándose la democracia semi-directa y la renuncia a los patrones de poder que fortalecen solamente a las élites políticas, empresariales, profesionales o culturales.

La preocupación central de las reformas ejecutadas en el periodo democrático 1985-2010 consistió en encontrar una nueva lógica para el orden político, concentrándose en la modernización institucional y la necesidad de mantener constantes los procesos electorales. De cualquier manera, las reformas olvidaron vincular aquella modernización institucional con la generación de un horizonte de sentido y transformación claros, lo cual exigía tener un orden democráticamente estable para la cultura y el propio Estado. Los múltiples conflictos e insatisfacciones desde la sociedad civil obstaculizaron las reformas o las suspendieron indefinidamente, por ejemplo, en los fracasos en el combate a la corrupción y la ineficiencia en los poderes judiciales (Méndez, O'Donnell y Pinheiro, 2002).

Gran parte de las reformas políticas, especialmente aquellas pensadas para cambiar profundamente los poderes judiciales, mejorar la cooperación entre el poder ejecutivo y los parlamentos, así como todos los

esfuerzos para implementar políticas sociales de alivio a la pobreza con criterios de impacto universal, perdieron la posibilidad de convertirse en catalizadores de cambio. En la mayoría de los casos, se generaron burocracias que manipularon los proyectos de reforma, pensando únicamente en objetivos electoralistas.

Las reformas no fueron consideradas como estructuras de comunicación entre los líderes reformistas, la sociedad civil y las instituciones estatales eficientes, con el fin de asegurar cadenas de efectos duraderos, independientemente de las visiones de corto plazo o los intereses políticos, restringidos a ciertos partidos y liderazgos. Esto hizo que las reformas pierdan poder, credibilidad, y sobre todo fueran neutralizadas por diferentes sectores de la sociedad que rechazaron la implementación de una serie de esfuerzos reformistas, al constatar la inexistencia de beneficios materiales directos que cambien los códigos de conducta diarios dentro de una democracia eficiente y con la capacidad de otorgar oportunidades de vida.

La democratización del sistema político y la modernización de los partidos políticos junto con los sistemas electorales, significó un trabajo e inversión enorme en toda América Latina. Sin embargo, las explosiones de violencia constante en la sociedad civil muestran que diferentes clases sociales, pueblos indígenas y otros grupos de interés no se apropiaron legítimamente de una agenda de modernización democrática. Los linchamientos para hacer justicia con las propias manos, la violencia urbana y la resistencia a obedecer los lineamientos institucionales del Estado en los ámbitos de la gigantesca economía informal, plantean serios vacíos y acciones inconclusas de democratización en la sociedad civil y el conjunto del sistema social (Vilas, 2007).

La sociedad civil tampoco ha logrado reformarse. ¿Qué es la sociedad civil en tiempos de globalización y por qué persisten el patrimonialismo y prebendalismo, que van caminando en un continuum entre la sociedad civil y el Estado, o viceversa? La sociedad civil latinoamericana es una gran campana de resonancia que tiende a alentar el prebendalismo, como reacción directa y supervivencia dentro de una serie de mecanismos egoístas de acción colectiva. La heterogeneidad social y la desigual distribución de autoridad impiden defender una cultura cívica. La democracia se oscurece en la vida diaria de la violencia intrafamiliar

y la inseguridad ciudadana. Una característica del posneoliberalismo consiste en una fuerte interpelación de la sociedad civil que cuestiona las reformas de mercado, reclama una mayor democratización, pero reproduce, peligrosamente, una violencia soterrada donde las mayores víctimas son las mujeres, las minorías sexuales y los indígenas, quienes sufren en carne propia la discriminación y los déficits de las reformas sociales para precautelar sus derechos.

La reproducción casi incontrolada de fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), hizo que diferentes segmentos de profesionales e intelectuales destruyan las posibilidades de acción independiente y participativa de la sociedad civil. Las instituciones de desarrollo social y las ONG no representan a todas las esferas problemáticas de la sociedad civil, lo cual exige un análisis sobre estos ámbitos en materia de reformas, aplicadas desde las bases sociales de la autodeterminación y la democracia directa en América Latina.

El concepto de reforma política cambia desde los perfiles de la sociedad civil, convirtiéndose en un foco de atracción para los movimientos sociales, e inclusive en ambiciones mayores donde las reformas se convierten en una posibilidad de ruptura constante con las relaciones de dominación.

Una revisión de los ajustes estructurales para colocar a todo el aparato productivo y competitivo en la región, dentro del cauce de la economía de mercado desde comienzos de los años noventa, trae necesariamente a la discusión aspectos pendientes. Los contradictorios procesos de privatización, el consecuente desenvolvimiento de los modelos político-empresariales y la apertura de los Estados hacia los mercados globales, ocasionaron, al mismo tiempo, una pérdida de soberanía política en beneficio del comercio internacional, generándose efectos disímiles en América Latina. Las privatizaciones debilitaron la infraestructura del poder estatal, fomentaron en muchos casos la corrupción y distorsionaron la toma de decisiones, que tiende a ocultar las relaciones poco claras entre los organismos multilaterales de desarrollo, las transnacionales, los partidos políticos, la lógica de élites y la reproducción de los pobres en la región (Chong y López de Silanes, 2005).

Chile se presenta como un ejemplo exitoso en este proceso, aunque las consecuencias de la dictadura militar dejaron intactos muchos aspec-

tos cruciales como la transición del autoritarismo hacia el fortalecimiento del presidencialismo y la formación de coaliciones donde germinaron resistencias al cambio y a una mayor participación de la sociedad civil. Chile todavía es un país dividido entre aquellos que apoyan las estrategias autoritarias de desarrollo y modernización, contra otros sectores que esperan mayor pluralismo y un sistema político que vaya más allá de la plutocracia. Al mismo tiempo, posee un lastre profundo que evita su crecimiento económico de manera más fluida; según Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, el principal problema de Chile es la incapacidad de las empresas para abrirse a nuevos negocios y crear las condiciones que permitan a los empleados independizarse y emprender negocios productivos propios (Guzmán, 2015).

Cuando se habla de crecimiento, Hausmann centra su análisis en cuánta innovación poseen los procesos productivos con el objetivo de expandirla dentro de la economía. Chile tiene un grave problema de crecimiento que no se origina en la incertidumbre frente a las reformas laborales o tributarias, sino en la cultura empresarial extremadamente cerrada. El ambiente empresarial y de negocios es excluyente porque se asemeja a una especie de club elitista casi con los mismos apellidos; si bien se publicitó el cartel de Chile neoliberal y exitoso, también es muy evidente que no puede competir con otras economías del Asia debido a la ausencia de innovación y porque los extranjeros y chilenos talentosos con otro origen, son excluidos. El nacionalismo autoritario heredado de la dictadura bloquea, tanto las perspectivas de consolidación democrática, como un futuro económico caracterizado por la innovación y las debilidades en cuanto a una economía de los conocimientos (Hausmann, 2015).

Los mismos dilemas pueden expresarse en la agenda de reformas para América Latina porque sigue siendo una incertidumbre si la vía democrática profundizará el desarrollo o, por el contrario, es la fuerza y la violencia impuesta verticalmente lo que traerá mejores tiempos para el Estado y la economía (Lee Bravo y Ciro Jaramillo, 2013).

Otros países como Bolivia, Venezuela, Ecuador y Argentina tuvieron graves problemas que se expresaron en crisis políticas y económicas, cuestionando profundamente el modelo de economía de mercado,

abriendo el paso a la expresión de alternativas como los movimientos sociales, partidos políticos de una supuesta nueva izquierda antisistema y nuevos caudillismos, aunque tampoco se despejó el terreno en términos de una mejor calidad de la democracia.

El escenario boliviano surgió como una probable alternativa posneoliberal cuando Evo Morales fue elegido presidente en el año 2005. De manera inmediata cambió la Constitución política y trató de cercenar en la raíz, el conjunto de las reformas de libre mercado, por medio de políticas de nacionalización de los sectores estratégicos de la economía: hidrocarburos, energía eléctrica, minería y telecomunicaciones. Las reformas parecían reacomodarse hacia el desarrollo de una tupida red de protección social para los grupos más pobres, lo cual dio como resultado un régimen populista bastante exitoso; sin embargo, la ineficiencia en el manejo de los fondos públicos, la corrupción y las amenazas del narcotráfico, hicieron que este nuevo modelo político posneoliberal, también presentara serias deficiencias e inestabilidad.

Los escándalos de corrupción al interior de la policía boliviana representan una profunda crisis institucional que destruye las mejores perspectivas de las reformas políticas en una democracia. Desde el año 2009, estallaron por lo menos 24 hechos de corrupción e irregularidades que involucraron a más de 100 policías. Los hechos más tremendos están ligados a las relaciones delincuenciales de los jefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y los llamados zares anti-drogas, con bandas del crimen organizado y el negocio del narcotráfico. Aquí destacan los casos de los coroneles Gonzalo Medina (2019), el general René Sanabria (2011), condenado en los Estados Unidos por traficar 144 kilos de cocaína; el general Oscar Nina (2015), ex comandante de la policía, detenido por narcotráfico y otros sucesos banales de delitos por robo, extorsión, violación y torturas. Estos hechos erosionan enormemente el sistema judicial y agravan la ingobernabilidad en los problemas de seguridad (Keefer y Loayza, 2010).

Los esfuerzos invertidos para llevar adelante las reformas políticas y económicas, tropezaron también con la desinstitutionalización de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). En cuarenta años de democracia (1982-2022), las FF.AA. en Bolivia tienen muchos problemas de institucionalidad y falta de compromiso con la estabilidad democrática. ¿Qué quiere

decir esto? Significa que existe un lento proceso mediante el cual las normas y conductas de las instituciones militares todavía no reconocen ni aceptan las enormes exigencias democráticas en términos del respeto de derechos y el cuidado de la estabilidad política a cargo del poder civil.

Con Evo Morales en el poder (2006-2019) tampoco se logró una mayor legitimidad y reconocimiento de autonomía institucional para mejorar la relación entre las FF.AA. y la defensa de la Constitución, o el respeto de la sociedad civil hacia la institución militar como entidad que defiende la soberanía estatal con plena confiabilidad. Aunque no es nada sorprendente, los militares son quienes violan de manera más sistemática y de forma impune los derechos humanos, junto con las instituciones policiales, aprovechando al mismo tiempo un montón de ventajas como una jubilación bastante holgada y un tratamiento privilegiado en términos de cargos, solamente porque podrían ayudar al presidente a mantenerse en el poder por razones estrictamente autoritarias y pragmáticas, destruyendo cualquier convicción democrática.

En la actualidad no existen propuestas de reforma político-institucional para identificar un conjunto de nuevos roles militares y una mejor profesionalización de las FF.AA. Más bien, Evo Morales delegó a éstas otras funciones como controlar el contrabando y ser parte de la seguridad pública, lo cual no resuelve su crisis de institucionalidad, sino que agudiza sus problemas de organización que afectan, no sólo a los militares sino también a su misma funcionalidad dentro del sistema político.

Existe un grave déficit de institucionalidad y problemas de modernización dentro de las FF.AA., sobre todo por la violencia que se practica en los cuarteles y el abuso de poder en las tareas de lucha contra el contrabando o el narcotráfico. Estos abusos son parte de un escenario pre-moderno y, por lo tanto, las FF.AA. están casi totalmente desprovistas de capacidades para reformarse desde adentro. La pregunta central es: ¿cuáles son los problemas de institucionalidad que se encuentran profundamente enraizados dentro de las FF.AA. bolivianas? La desinstitucionalización repercute en la inestabilidad política de diferentes gobiernos, generando permanentes escenarios de violencia que destruyen los valores básicos de la democracia (Pion-Berlin y Trinkunas, 2010).

Con carácter hipotético se puede afirmar que la carencia de una institucionalidad en las FF.AA. impacta en la aparente instrucción integral que se imparte a los conscriptos en los cuarteles del país bajo el nombre de servicio militar obligatorio, creándose patrones de autoritarismo impune y determinando una incapacidad de adaptación de la institución militar a los requerimientos de un sistema de derechos. Eso acelera las situaciones de ingobernabilidad, incrementa las amenazas de corrupción y rompe con las posibilidades de construir mayores reformas democráticas en un escenario de balances de poder desiguales y pretorianos (El-Shimy, 2016). Por estas razones, Bolivia se identifica mucho más con los regímenes autoritarios de China, Rusia y Venezuela, desechando las tradiciones liberales y republicanas.

Los constantes vacíos en la construcción de una institucionalidad dentro las FF.AA., vienen desde la instauración de la democracia en 1982, debido a la falta de claridad e interés de los legisladores y militares de alto rango para abordar temas como su modernización y formación profesional, provocando así condiciones de violencia en los cuarteles y en la intervención de los militares en los momentos de manutención del orden político interno. Estos problemas crean una enorme incertidumbre respecto a los principios democráticos que las FF.AA. deben obedecer en Bolivia. La democracia, una vez más, está en constante peligro.

Desde una orientación un poco más innovadora, en el marco de los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes, debe abrirse la alternativa para realizar un servicio civil y dejar de lado el servicio militar obligatorio. El Estado también debe garantizar que la realización del servicio militar sea uno de los ejes para el total respeto de los derechos fundamentales y para la reforma del Estado. Es oportuno sugerir que el servicio militar tienda progresivamente a desaparecer o, en todo caso, pueda combinarse con el servicio civil, de tal manera que los ciudadanos optemos por una u otra modalidad, con el único propósito de rendir honores hacia la soberanía del Estado y aplicar una gama de valores cívicos.

El telón de fondo se sitúa en estos valores cívicos y en la necesidad de recomponer los esfuerzos para respetar y sacrificarse por la nación, lo cual no pasa necesariamente por las FF.AA. porque éstas, junto con su desinstitucionalización, se han desprestigiado como núcleo de la de-

fensa cívica de la nación. Los altos jefes de las FF.AA. tienden a acumular dinero fácil y a no rendir cuentas cuando abusan a su propia gente o a los ciudadanos de a pie. En consecuencia, parece que llegó la hora de abandonar el servicio militar obligatorio, así como reformar las FF.AA. en Bolivia para evitar que éstas acaben nuevamente con la democracia.

Por otra parte, es fundamental reflexionar sobre la conformación de partidos y el nacimiento de líderes donde el debate entre las fuerzas de izquierda revolucionaria versus las posiciones neoliberales o de mercado, marcan las fronteras de una democracia inestable pero, simultáneamente, de regímenes democráticos más pluralistas donde tienen lugar la fuerza participativa de los movimientos indígenas, la equidad de género, los movimientos ambientalistas y las constantes exigencias para tener un Estado protector, en términos de políticas sociales eficientes, solidarias y universales que traten de erradicar la pobreza.

En Centroamérica, las discusiones todavía giran en torno a la reconciliación luego de las guerras civiles de las décadas de los años ochenta y principios de los noventa. Si bien cualquier movimiento armado dejó de interpelar a las masas para actuar en política, la violencia permanente desde los procesos de desmovilización, presenta la necesidad de estudiar con cuidado el papel del Estado como estructura plenamente institucionalizada para guiar las decisiones sobre modernización o su progresiva destrucción, fruto de las amenazas y el desafío al orden político que detentan diferentes grupos violentos al rechazar la legitimidad estatal.

En el sistema político centroamericano no está plenamente resuelto el problema de la solidez y validez de lo que significa un Estado nacional. Asimismo, el final de las guerrillas aún no pudo canalizar un nuevo modelo de desarrollo por medio de los tratados de libre comercio, ya que éste tampoco es totalmente homogéneo e incuestionable. En varios casos, las élites empresariales reforzaron las condiciones autoritarias para profundizar la economía de mercado, instrumentalizándola en el contrabando, la erosión de marcos regulatorios y el peligro ascendente del narcotráfico que se erige como amenaza global. Posiblemente, la excepción sea Costa Rica donde hay una concatenación positiva entre la eficiencia en el funcionamiento del Estado, una burocracia pequeña

pero profesional, la provisión de servicios, el crecimiento económico y la estabilidad política democrática.

En realidad, Centroamérica concentra las contradicciones políticas de otros países en la región donde el debate para establecer zonas de mercado libre, impulsar el desarrollo económico en condiciones de inversión extranjera e intentar una combinación sin conflictos entre democracia política y estructuras de mercado globales, resulta en una crisis de identidad sociocultural. Esto ha ocasionado la emergencia de fuertes demandas sociales para posibilitar el desarrollo de un Estado que unifique a las clases sociales y culturas, antes que utilizar sus capacidades estatales, únicamente como un conjunto de instituciones subordinadas a la acumulación de capital.

Asimismo, casi todos los Estados centroamericanos han fracasado en su búsqueda de preservar los mínimos estándares de seguridad, debido a que la violencia urbana y el crimen organizado generaron tal desequilibrio, que seis de cada diez migrantes de Centroamérica prefieren lanzarse hacia los Estados Unidos en las peores condiciones, antes de permanecer sofocados por la posible desaparición, en medio de un Estado anómico que pacta su funcionamiento con las bandas de jóvenes vinculados al narcotráfico y la trata de personas (Arguiano Téllez y Villafuerte Solís, 2016).

Conclusiones

En su conjunto, América Latina está, una vez más, frente a múltiples vías de transición: primero, transita hacia una modernización plena donde las economías fuertes de México, Colombia, Perú y Brasil específicamente, marcan diversas oportunidades. Segundo, se presenta una transición difícil y desigual en múltiples niveles hacia una democracia de baja calidad y posible derrumbe donde aún existen más de 203 millones de pobres, amenazas de desmantelamiento del orden político, destrucción del sistema de partidos, el regreso de golpes de Estado como el de Guatemala en abril de 2009 y el de Paraguay en junio de 2012, así como la instrumentalización de varias reformas políticas y

constitucionales para favorecer las reelecciones de caudillos presidenciales en Bolivia, Venezuela, Nicaragua, Ecuador e inclusive Colombia (Comisión Económica para América Latina, 2017). Este panorama hace que los conflictos de seguridad y los peligros internacionales de crisis ingobernables tiendan a aumentar.

Una vez más, está pendiente aquella transición hacia la integración con plena autodeterminación, pues América Latina sigue fragmentada y, por lo tanto, constantemente debilitada frente a otras fuerzas hegemónicas como los Estados Unidos, la Unión Europea y el peso específico de China en el contexto internacional (Kaplan, 2016).

La descentralización del Estado en la región, junto con una mirada desde los gobiernos municipales, presenta varias incertidumbres porque los problemas de carácter nacional se han reproducido en una dimensión local como la apropiación ilegal de fondos públicos, el patrimonialismo, la ineficacia institucional y el bajo rendimiento en términos de decisiones políticas para viabilizar un desarrollo municipal duradero y con efectos positivos hacia los ámbitos nacionales.

Un tema que es muy difícil de ser medido y abordado por los estudios tradicionales de ciencia política, relaciones internacionales, economía y sociología, está referido a los liderazgos para el cambio, sea revolucionario, institucional o democrático. ¿Cómo se gestan los líderes en el siglo XXI y la sociedad del conocimiento?, ¿cuáles son los obstáculos a superar por los líderes jóvenes y de qué manera es posible construir liderazgos fuertes en el largo plazo, dentro de las instituciones o en los movimientos sociales de la sociedad civil?, ¿por qué se ha desvanecido, casi por completo, en las discusiones políticas y teóricas de hoy, las relaciones entre el desarrollo de liderazgos transformadores, las perspectivas morales de la sociedad y los procesos pedagógicos para llevar adelante el desarrollo de las virtudes en los seres humanos, así como la confianza para forjar un desarrollo con autodeterminación y proyección de futuro?

Estas interrogantes pueden ser naturalmente ampliadas. Sin embargo, también se requiere una delimitación teórica e histórica con el objetivo de precisar y aclarar el lugar en que se encuentran los diferentes países. Esto significa colocar los análisis en una perspectiva pluralista que facilite obtener buena información, pero con una visión global so-

bre la situación contemporánea de los Estados y las varias manifestaciones de la sociedad civil en la región.

Un aspecto adicional también queda claro. A pesar de que las discusiones teóricas e ideológicas en los últimos treinta años sobre democracia son diversas y con una enorme bibliografía, surge también la constatación de no tener una *gran teoría* general o ambición de generalización interpretativa sobre América Latina (Centeno y López-Alves, 2000). Este es otro ámbito de insatisfacción pues desde la academia, una sola teoría desde América Latina para comprender la misma, hoy en día prácticamente ha fracasado.

Hacia adelante debe clarificarse cuál es la racionalidad de nuevas reformas políticas, entendidas como procesos de cambio dotados de sentido. Toda reforma política impulsada con un sentido de racionalidad significa un diseño observando las circunstancias específicas a reformar, pero con el regreso de utopías y enfoques de futuro. Las reformas tampoco pueden carecer de utopías porque esto implica vaciarlas de racionalidad. Las utopías políticas tienen que regresar al debate ideológico del cambio porque especifican dos elementos: dirección y contenido.

Las reformas políticas se reorientarán mejor, rechazando los abusos del poder y ratificando una confianza en la razón como guía de nuevas conductas democráticas y morales. Inclusive así, las posibilidades de éxito son inciertas cuando la razón se aplica al cambio político, pero es importante optimizar el papel de las élites, los procesos de legitimación social y el liderazgo de las reformas. La economía tampoco representa una razón absoluta de orientación y éxito en la región, al haberse convertido, en todo caso, en un tipo de conocimiento que reforzó la irracionalidad de las desigualdades y la desazón respecto al futuro (Zakaria, 2019).

Las reformas tampoco fructificarían sin un liderazgo y conocimientos para otorgarles sentido. Por lo tanto, repensar las reformas políticas en América Latina exige adicionar, necesariamente, un sentido de transformación que siempre especifique sus fundamentos, que tenga unidad como racionalidad viable e imagine una finalidad como objetivo futuro y un horizonte alternativo.

Brasil y el regreso de Lula

Brasil se encuentra en un callejón sin salida después de las elecciones presidenciales de octubre de 2022. La polarización política e ideológica entre el presidente electo Inacio Lula Da Silva y el saliente Jair Bolsonaro, alcanzó extremos de violencia casi imposibles de reconciliar. Todo está partido en dos: por un lado, se observan las visiones de un país que apuntan hacia el regreso de políticas sociales más ambiciosas donde puedan reconstruirse la Bolsa Familia y otros beneficios en la erradicación de la pobreza, un objetivo casi directamente identificado con el liderazgo de Lula. Por otro lado, están las posiciones que confían más en la economía de mercado para supuestamente optimizar la competitividad, junto a un conjunto de iniciativas privadas donde se fortalezca la llamada ciudadanía liberal y la ética conservadora de familias individualizadas que se rehúsan a debatir metas colectivas.

Aunque se logró un ganador para ocupar la silla presidencial, el Congreso brasileño estará cargado nuevamente de un enfrentamiento entre las lógicas de la izquierda lulista que tratará de articular el Partido de los Trabajadores (PT), frente al Partido Liberal y sus aliados donde los seguidores de Bolsonaro continúan presionando por el combate para eliminar un inexistente “comunismo”, defender el militarismo en las pugnas por el poder y exigir un crecimiento económico imparable, descalificando las políticas medioambientales, consideradas como sensacionalistas. Los consensos de gobernabilidad están lejos de ser alcanzados en la dinámica parlamentaria, lo cual podría frenar las decisiones más urgentes, tanto en el diseño de la reconstrucción económica, como en la pacificación del país. De parte de Bolsonaro, las amenazas de un autogolpe y la autocracia, confirman su identidad como un fenómeno peligroso y, asimismo, como un liderazgo débil que, al no poder ganar, presiona para imponer una fuerza por medio de la violencia. Algo totalmente inútil.

Por lo tanto, las elecciones presidenciales no lograron alcanzar la unificación como se esperaba en un primer momento. Tan solo fueron un interregno y, en consecuencia, Lula se ve en la necesidad de gobernar un país, devastado por un proceso de destrucción de la seguridad

ciudadana debido al auge del crimen organizado, el agravamiento de la pobreza, el desempleo, la inflación, el endeudamiento y la asistencia de las familias que apenas se recuperan luego de los peores azotes del Covid-19. A esto se suma la urgencia de recursos inmediatos aunque el crecimiento económico no puede ir más allá del tres por ciento y, en algunos casos, tiende a estancarse. La innovación tecnológica no es una ventaja brasileña, los precios internacionales de las exportaciones han caído por la recesión mundial y la inversión extranjera directa jamás despertó la confianza del PT.

En América Latina, Brasil fue el epicentro del mayor número de muertos durante los picos más fuertes de la pandemia, arrastrando al país hacia detestables desigualdades: protegidos versus desprotegidos. Lula tendrá la imprescindible exigencia de fomentar la unidad y, al mismo tiempo, mejorar la representatividad política de la figura presidencial. El principal obstáculo no son los resultados electorales tan polarizados respecto al derrotado Bolsonaro, sino la sombra de la corrupción.

Está por verse si Lula podrá revertir los grandes fracasos como lo acontecido con la planta petroquímica Comperj, junto a dos refinerías ubicadas en Itaboraí del estado de Río de Janeiro. Este fue un multimillonario proyecto lanzado desde el año 2008 que nunca pudo concluir, inclusive hasta el año 2018 debido a que la corrupción llegó a sus máximos niveles con la operación Lava Jato. Esta planta, además, estuvo directamente vinculada a otros proyectos de infraestructura encargados a Odebrecht que, a su vez, fomentó el sobreprecio de los contratos, lavado de dinero y coimas en Petrobras. Por esto, la economía del petróleo dejó de ser la tabla de salvación para Brasil.

Mientras Petrobras continúe siendo una empresa monopólica en Brasil, estará sometida al clientelismo político. En sus anteriores gestiones de gobierno, Lula cometió el error de politizar la empresa apoyando liderazgos que, en lugar de mejorar Petrobras con la perspectiva de una diversificación energética y orientación profesional, terminó eliminando la transparencia y posicionando el pragmatismo para colocar sobreprecio a cualquier plan.

El PT se acostumbró a incentivar la venta de combustibles a precios inferiores a los del mercado internacional, deteriorando el déficit fiscal y precipitando constantemente las amenazas del desabastecimiento. Lula

deberá convertirse en otra izquierda realmente confiable en la reforma profesional del Estado, con el objetivo de revertir la casi incontrolable deforestación de la Amazonía, combatir el hambre de 33 millones de brasileños en medio de la crisis medioambiental y debatir eficazmente si puede replantear o cerrar aquellos proyectos incompletos como la planta nuclear Angra Dos Reis.

Como se acaba de exponer, los procesos de complejización hacen que sea cada vez más dudoso tener un solo marco interpretativo y, por ello mismo, las ventajas de la teoría democrática en el continente deben descansar en las múltiples visiones, la irrenunciable crítica y la reflexión sobre varias posibilidades donde puedan preverse otras perspectivas para una sociedad mejor, facilitando el regreso de utopías políticas esperanzadoras. Estas todavía son caminos opcionales hacia un mundo más humano y noble desde América Latina, si la miramos como un continente expuesto a su autodeterminación y también vigilante de su propia consciencia colectiva. Asimismo, uno de los objetivos en el reordenamiento de las relaciones internacionales descansa en la necesidad de contrarrestar cualquier estrategia hegemónica donde la violencia tienda, por la fuerza, a homogeneizar las democracias, los Estados y las sociedades.

Bibliografía

- Arguiano Téllez, M. E., y Villafuerte Solís, D. (coord.) (2016). *Migrantes en tránsito a Estados Unidos. Vulnerabilidades, riesgos y resiliencia*. Tijuana: El Colegio de la Frontera Norte.
- Brandon, J. M., y Gray, D. H. (2015). Iran's Foothold in Latin America: Striking Back at the United States. *Global Security Studies*, 19-30. Disponible en: <http://globalsecuritystudies.com/Brandon%20Iran%20-AG.pdf>
- Buzan, B. (2004). *From International to World Society. English School Theory and the Social Structure of Globalisation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cardozo, F. H., et al. (2011). *War on Drugs. Report of the Global Commission on Drug Policy*. Suiza: Global Commission on Drug Policy.

- Casey, N. (2019). Los documentos secretos de Venezuela sobre el ministro Tareck El Aissami. *The New York Times*. 2 de mayo. Disponible en: <https://www.nytimes.com/es/2019/05/02/venezuela-tareck-el-aissami-narcotrafico/?fbclid=IwAR09kroJ-mC-FNHocZkL6vuHImg2-2CZ-G0rFoRwgXS5OIElBhbLUtftLPaM>
- Centeno, M. Á., y López-Alves, F. (2000). *The Other Mirror. Grand Theory through the Lens of Latin America*. Nueva Jersey: Princeton University Press.
- Cepi, N. (2014). La política exterior de Bolivia en tiempos de Evo Morales Ayma. *Si Somos Americanos. Revista de Estudios Transfronterizos*, 125-151.
- Chomsky, N. (2007). *Failed States. The Abuse of Power and the Assault on Democracy*. Nueva York: Metropolitan Books, Henry Holt and Company.
- Chong, A., y López de Silanes, F. (comp.) (2005). *Privatization in Latin America. Myths and reality*. Washington: Inter-American Development Bank-Stanford University Press.
- Clark, H. (2012). *Nuestro mundo en 2050, ¿más sostenible y equitativo... o menos?*, 7 de noviembre. Disponible en: <https://www.undp.org/content/undp/es/home/presscenter/speeches/2012/11/07/helen-clark-our-world-in-2050-more-equitable-and-sustainable-or-less-.html>
- Collins, C. (2019). A Cure for Excessive Wealth Disorder. *Inequality. Blogging our great divide*, 4 de abril. Disponible en: <https://inequality.org/great-divide/cure-excessive-wealth-disorder/>
- Comisión Económica para América Latina (2017). *Estudio económico de América Latina y el Caribe. La dinámica del ciclo económico actual y los desafíos de política para dinamizar la inversión y el crecimiento*. Santiago de Chile: CEPAL-Naciones Unidas.
- Ejdesgaard Jeppesen, A. M. (2012). Global Discourses, Local Meanings: Indigenous and Nationalistic Responses to Neoliberal Globalization. En M. A. Nilsson. *Latin American Responses to Globalization in the 21st Century* (pp. 96-114). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Ellis, E. (2016). *Chinese Engagement with Bolivia. Resources. Business Opportunities, and Strategic Location*. Disponible en http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/apj-s/2016/2016-2/2016_2_03_ellis_s_eng.pdf
- El-Shimy, Y. (2016). *A Model of Praetorian States*. Cambridge, MA.: Harvard Kennedy School-Belfer Center for Science and International Affairs.

- Fauriol, G. (2019). Is Haiti Unraveling? *Global Americans. Smart News & Research for Latin Americans Changemakers*. Disponible en: <https://theglobalamericans.org/2019/02/is-haiti-unraveling/>
- Freier, N. P. et al. (2017). *At Our Own Peril: Do Risk Assessment in a Post-Primacy World*. Carlisle Barracks, PA.: US Army War College Press.
- Fukuyama, F. (2017). America, the Failed State. *Prospect*, enero. Disponible en: https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/america-the-failed-state-donald-trump?fbclid=IwAR0hDHIv6OTNq8XEvCIOPR80tERcaEETMzj92B3Bfz5cUZfTgTUdLd02_v4
- Griffiths, M. (1992). *Realism, Idealism and International Politics. A Reinterpretation*. Nueva York: Routledge.
- Guzmán, J. A. (2015). Académico de Harvard desmenuza la cultura empresarial chilena que frena el crecimiento. *Centro de Investigación Periódica (CIPER)*, 20 de octubre. Disponible en: <https://ciperchile.cl/2015/10/20/academico-de-harvard-desmenuza-la-cultura-empresarial-chilena-que-frena-el-crecimiento/>
- Hausmann, R. (2015). The Education Myth. *Project Syndicate. The World's Opinion Page*, 31 de mayo. Disponible en: <https://www.project-syndicate.org/commentary/education-economic-growth-by-ricardo-hausmann-2015-05?barrier=accesspaylog>
- Human Rights Council (2018). *Report of the Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights on His Mission to the United States of America*. Nueva York: United Nations-General Assembly, Thirty-eighth session, 18 June–6 July.
- Kaplan, S. B. (2013). *Globalization and Austerity Politics in Latin America*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Kaplan, S. B. (2016). Banking Unconditionally: the Political Economy of Chinese Finance in Latin America. *Review of International Political Economy*, 643-676.
- Keefer, P., y Loayza, N. (ed.) (2010). *Innocent Bystanders: Developing Countries and the War on Drugs*. Nueva York: World Bank-Palgrave Macmillan.
- Klein, N. (2008). *La doctrina del shock. El auge del capitalismo del desastre*. Buenos Aires: Paidós.
- Krasner, S. (1999). *Sovereignty. Organized Hypocrisy*. Nueva Jersey: Princeton University Press.
- Lake, D., y R. Powell (eds.) (1999). *Strategic Choice and International Relations Princeton*. Nueva Jersey: University Press.

- Latinobarómetro (2018). *Informe 2018*. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro. Disponible en <https://www.latinobarometro.org/latContents.jsp>.
- Lavie, M. (2009). Venezuela y Bolivia envían uranio a Irán, según informe secreto del gobierno israelí. *El Nuevo Herald*, mayo. Disponible: <https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article1995847.html>
- Lee Bravo, H. I., y Ciro Jaramillo, J. (2013). Democracia y desarrollo: el caso de la República de Corea. *Revista Digital Mundo Asia Pacífico*, 2 (2), 33-48.
- Long, T. (2018). Latin America and the Liberal International Order: An Agenda for Research. *International Affairs*, 94 (6), 1371–1390.
- MacDonald, B. J. (2010). Securing International Society: Towards an English School Discourse of Security. *Australian Journal of Political Science*, 9 (2), 307–330.
- Martínez, E. (2010). *Relaciones peligrosas: el eje Teherán-Caracas-La Paz*. Santa Cruz: El País.
- Mathieu, H., y Niño Guarnizo, C. (eds.) (2010). *Anuario 2010 de la seguridad regional en América Latina y el Caribe*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.
- Méndez E., J., G. O'Donnell y P. S. Pinheiro (comps.) (2002). *La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina*. Buenos Aires: Paidós.
- Metcalfe, S. (2017). Neoliberalism: the Idea that Swallowed the World. *The Guardian*, 18 de agosto. Disponible en: <https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world>
- Mignolo, W. (2012). The Role of BRICS Countries in the Becoming World Order: “Humanity” Colonial/Imperial Differences, and the Racial Distribution of Capital and Knowledge. *Paper presented and discussed at the meeting of the Academy of Latinity and Tsinghua University*. Beijing.
- Mignolo, W. (2018). The Mirage of Universalism Behind European Localism. *Public Seminar*. In *the spirit of The New School for Social Research, informing debate about the pressing issues of our times*. Disponible en: http://www.publicseminar.org/2018/05/the-mirage-of-universalism-behind-european-localism/?fbclid=IwAR2_RPjAT351N0wukl-ZvXYCMQCFgBWrWvCnBbBpiih_QQkLNzr1lH9sWU
- Mijares, V. M. (2017). Soft Balancing the Titans: Venezuelan Foreign-Policy Strategy toward the United States, China, and Rusia. *Latin American Policy*, 8 (2), 201–231.

- Morales, W. (2016). Bolivia's Foreign Policy toward the Middle East (2000–2015): Promoting a Populist and Radical Agenda Abroad. En M. T. Kuri (ed.), *Latin American Foreign Policies towards the Middle East. Middle East Today* (pp. 179–200). Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Muggah, R. (2016). *El dominio de Estados Unidos ha terminado. Para el 2030, tendremos un puñado de potencias mundiales*, 21 de noviembre. Disponible en: <https://es.weforum.org/agenda/2016/11/el-dominio-de-estados-unidos-ha-terminado-para-el-2030-tendremos-un-punado-de-potencias-mundiales/>
- Passi Livacic, G., y J. C. Martines Belieiro Jr. (2018). Análisis de la teoría del Estado Burocrático Autoritario. De la comparación de los casos de Brasil y Chile en el debate de la posibilidad de un lugar común de desarrollo. *Revista de Estudios Políticos y Estratégicos*, 80-101.
- Pion-Berlin, D., y H. Trinkunas (2010). Civilian Praetorianism and Military Shirking during Constitutional Crises in Latin America. *Comparative Politics*, 395-411.
- Piotrowski, C. (2010). Earthquake in Haiti: a Failure in Crisis Management? *Organization Development Journal*, 28 (1), 107-112.
- Reuters, Business News (2019). Chile to China: Let Us Be Your Business Hub in Latin America, 25 de abril. Disponible en: <https://www.reuters.com/article/us-chile-china/chile-to-china-let-us-be-your-business-hub-in-latin-america-idUSKCN1S12DO?fbclid=IwAR14AgTsMkzPSkxAjRkaYdEvJmfNyKwa1pRi5TpSLgc1jooZg6ovA9WETs>
- Rouvinsk, V. (2019). Russian-Venezuelan Relations at a Crossroads. *Latin American Program, Kennan Institute, The Woodrow Wilson Center for Scholars*. Disponible en: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/russia-venezuela_report_rouvinski_final.pdf
- Sachs, J. B.-G. (2019). The Trump Contagion. *Project Syndicate. The World's Opinion Page*. Disponible en: <https://www.project-syndicate.org/commentary/five-steps-to-counter-trump-by-jeffrey-d-sachs-et-al-2019-03?fbclid=IwAR2IOsgbujnmUnJbi3pu15HrU17T3ULYBthUGIerwhplBanhg-W9IKEAgH4>
- Seligman, L. (2018). U.S. Military Targets Growing Russian and Chinese Influence in Latin America. *Foreign Policy*. Disponible en: <https://foreignpolicy.com/2018/11/19/us-military-targets-growing-russian-and-chinese-influence-in-latin-america/>
- Stiglitz, J. (2012). *The Price of Inequality. How Today's Divided Society Endangers Our Future*. Nueva York: Norton and Company Inc.

- The Economist (2018). Disrupting the Air Bridge. Peru and Bolivia Are Unlikely Allies in the War on Drugs. *The Economist*, agosto. Disponible en: <https://www.economist.com/the-americas/2018/08/18/peru-and-bolivia-are-unlikely-allies-in-the-war-on-drugs>
- The Weapons of Mass Destruction Commission (2006). *Weapons of Terror. Freeing the World of Nuclear, Biological and Chemical Arms*. Estocolmo: EO Grafiska.
- Tickner, A. B. (2012). No Place for Theory? Security Studies in Latin America. En A. B. Tickner (ed.). *Thinking International Relations Differently* (pp. 92-114). Chippenham, Wiltshire: Routledge.
- United Nations (2015). *Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development*. Nueva York: United Nations. Disponible en: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf>
- Vilas, C. M. (2007). Linchamientos y conflicto político en Los Andes. *Folios*, Segunda Época, 3-26.
- Zakaria, F. (2019). The End of Economics? *Foreign policy*, enero. Disponible en: <https://foreignpolicy.com/gt-essay/the-end-of-economics-fareed-zakaria/>

Recibido: 21 de octubre de 2022

Aceptado: 2 de diciembre de 2022